

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Junio 9 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el C. Juez de Distrito de Puebla por el C. Juan Mora, contra la providencia que lo retiene en el servicio de las armas. Considerando: que de autos consta, que la consignacion de Mora al ejército, fué hecha sin su voluntad contra lo prevenido en el art. 59 de la Constitucion general de la República, se declara: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia que en 13 de Mayo último pronunció el C. Juez de Distrito del Estado de Puebla que falló: "La Justicia de la Union ampara y protege al C. Juan Mora por haber sido destinado al servicio de las armas.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Oyazon.*—*José M. Lozano.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Muteos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 7 de 1873.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Tamaulipas por Leonardo Isaguirre, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El que suscribe, Administrador de esta Aduana marítima, que por ministerio de la ley lleva la voz fiscal, dice: que de las presentes diligencias consta, que el C. Leonardo Isaguirre solicita amparo por haber sido tomado de leva (segun dice) el 26 de Diciembre último, por una comision de soldados y forzado á prestar el servicio de las armas en la batería fija de esta Ciudad. Pasado el asunto á informe del C. Antonio Rojano, comandante de dicha batería, manifiesta este gefe, que dicho C. Isaguirre sentó plaza voluntariamente en el cuerpo en presencia de dos testigos, que lo fueron los sargentos de la misma batería CC. Joaquin Cordero y Macario Castro, y que ha sido admitido y pasado por cajas con conocimiento y aprobacion de la autoridad militar segun la filiacion que en copia obra en este expediente. El fiscal opina, que si se estableciese como precedente legal la presentacion de voluntarios ante los mismos gefes y se pudiese autorizar con solo la presencia de los sargentos de los cuerpos en que aparecen colocados, sería fácil poner de soldados á cuantos se quisiera, como y cuando pluguiese á las autoridades y gefes del ramo de guerra, contando de seguro con la deferencia de los mismos subalternos que no pueden menos de prestarla mediante su obediencia. No es por lo tanto, muy firme y segura la prueba testimonial que aduce el gefe de artillería, para justificar que el quejoso se ha presentado voluntario al servicio de las armas; porque los sargentos dichos, girando bajo la disciplina y subordinacion mi-

litar, no puede creerse que tengan la imparcialidad é independencia necesarias para ser testigos en este asunto. Por tales razones á pesar de la atención que merece el informe del repetido comandante de artillería por el carácter y representación de este jefe, el fiscal cree que es de concederse al C. Leonardo Isaguirre el amparo que solicita, sobre el mejor y mas acertado parecer de ese Juzgado.—Tampico, Abril 23 de 1873.—Firmado.—Francisco M. Rojas.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Tampico, Mayo 14 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido por el C. Leonardo Isaguirre, á virtud de considerar violada en su persona la garantía que reconoce la Constitución general en su artículo 5º consiguíendose al servicio de las armas en la batería fija de esta plaza; y en él, el informe del jefe de ella, donde manifiesta que dicho individuo fué presentado voluntariamente el 28 de Diciembre último para lo cual acompañó como comprobante la filiación correspondiente: el pedimento del C. Promotor fiscal en que solicita se le conceda el amparo fundándose en las razones que expone de no ser admisible la prueba testifical de los sargentos de la misma batería CC. Joaquín Cordero y Macario Castro: el auto de 25 de Abril en que se recibió á prueba este negocio, sin que las partes hubiesen rendido alguna, ni presentado el alegato correspondiente: el de citación para sentencia con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y verconvino. Considerando: que á la fecha en que fué aprehendido Leonardo Isaguirre no estaban suspensas por la ley las garantías que este considera violadas y que reconoce nuestra Carta fundamental en su artículo ya citado: que si bien el jefe de dicha batería fija, presenta como justificante de haberse presentado aquel voluntariamente, el testimonio de los sargentos del mismo

cuerpo, no debe considerarse como una prueba fehaciente y jurídica; pues como dice el fiscal, sería fácil poner de soldados á cuantos se quisiera contando con la deferencia de los mismos subalternos que no pueden menos de prestarla, mediante su obediencia y subordinación, suponiéndose por lo tanto carezcan de la imparcialidad debida para testificar en un asunto que les pertenece, siendo así que puede muy bien ocurrirse á otros individuos que no fueran del mismo cuerpo, para acreditar la circunstancia que se asevera. En vista de estas razones, de lo pedido por el quejoso y lo solicitado por el C. Promotor fiscal, la Justicia de la Unión declara: Que ampara y protege al C. Leonardo Isaguirre contra el acto que motivó la interposición de su recurso por haberse violado en su persona la garantía que concede la Constitución general en su artículo 5º. Hágase saber á quien corresponda; sáquense las copias de costumbre para el Diario Oficial y Semanario Judicial de la federación; y previa citación de las partes, elévense estas diligencias á la Suprema Corte de la Nación para los efectos de la ley. Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Lic. Ramon Rosales, Juez de Distrito de Tamaulipas, actuando por receptoría á falta de escribano; de que testificamos.—R. Rosales.—A.—Alfredo Villaverde.—A.—Jesus Barrios.

Es copia de su original que certifico; de que testificamos. Tampico, Mayo 14 de 1873.—R. Rosales.—A.—Alfredo Villaverde.—A.—Jesus Barrios.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México Junio 9 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Tampico, por el C. Leonardo Isaguirre contra la providencia que lo re-

tione en el servicio militar. Considerando: que de autos consta que el promovente fué consignado como soldado á la Batería fija de aquella plaza, sin su consentimiento, lo que importa una infraccion expresa del art. 5º de la Constitucion general de la República, se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 14 del último Mayo por el C. Juez de Distrito de Tampico que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Leonardo Isaguirre contra la providencia que motivó el presente recurso.—Devuélvanso las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José M. Lozano.*—*J. M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, Secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 3 de 1873.—*Lic. Enrique Landa* oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Lic. Victor Covarrubias por su esposa, contra el acto de embargo verificado por la oficina recaudadora de ese Estado, en las rentas de la hacienda de la Cueva, por adeudo de contribuciones.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic.

Victor Covarrubias fué requerido en la tarde del Lunes 25 de Noviembre último, por la Recaudacion de contribuciones de esta Ciudad para el pago de novecientos treinta y cinco pesos, cuarenta y siete centavos procedentes de contribuciones de la hacienda de la Cueva de la propiedad de la señora su esposa.

Le fueron embargadas las rentas de esa finca y contra ese proceder solicita ser amparado por la Justicia federal, á causa de haberse violado en su persona la garantía contenida en el artículo 16 de la Constitucion, que establece que: "Ninguno puede ser molestado en su familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." La incompetencia de la autoridad la deriva el quejoso, de que la legislatura actual se instaló sin *quorum* y el artículo 41 de la Constitucion del Estado previene: "Que el Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo sin la concurrencia de mas de la mitad del número total de sus miembros." En consecuencia, todos sus actos son nulos. Tambien la hace consistir en que el coronel D. Julio María Cervantes, no puede ser gobernador por que se lo prohíben los artículos 77 y 80 de la Constitucion local.

La causa legal del procedimiento no existe en concepto del quejoso por falta del Poder Legislativo para imponer contribuciones y del Ejecutivo para hacerlas efectivas.

Sobre la validéz de los actos ejercidos por persona incapaz, han disputado los autores y comentaristas conviniendo algunos en que el error comun hace derecho y ocupa el lugar de la verdad.

Era principio de derecho entre los romanos que el esclavo no pudiera ser testigo en un testamento; considerándose sin embargo válido su testimonio cuando por el comun consentimiento era reputado libre. (L. 1º C.